

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SETENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. Convertido
Transitoriamente en **JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) DE PEQUEÑAS**
CAUSAS Y COMPETENCIA

PROCESO: Ejecutivo. No. 11001-4003-070-2019-00947-00
Veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Procede el despacho a desatar el **RECURSO DE REPOSICIÓN** subsidiario de **APELACIÓN** presentado por la parte demandante, por conducto de apoderado judicial, en contra del auto de fecha tres (3) de septiembre de 2021 (fl.40), por medio del cual se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito.

ANTECEDENTES

Precisa el recurrente en breve síntesis que, se procedió a la terminación del proceso sin que mediara por parte del despacho requerimiento previo y bajo el argumento de haber permanecido inactivo por el término de un año, esto sin tomar en consideración que ante el resultado infructuoso de las notificaciones el despacho decretó el emplazamiento en los términos del artículo 108 del Código General del Proceso.

Igualmente, expone que el 4 de junio de 2020, entró en vigencia el Decreto 806 de 2020, con ocasión a la emergencia sanitaria y económica producida por el Covid 19, normativa que pregonaba por favorecer la virtualidad en la administración de justicia, de suerte que, en su artículo 10 releva a la parte actora de la carga de surtir el emplazamiento y entiende por satisfecho el mismo con la inclusión del sujeto en el registro nacional de personas emplazadas, carga que el correspondía asumir a la secretaría del despacho.

Bajo los anteriores derroteros, señala el inconforme que existe un error por parte del despacho por cuanto con la entrada en vigencia del Decreto 806 de 2020 la carga que corresponde al emplazamiento del demandado debe ser asumida por la secretaría, motivo por el cual solicita se acceda a la revocatoria del auto atacado.

CONSIDERACIONES

El recurso de reposición como medio de impugnación procede contra los autos que dicte el juez a fin de que los revoque o reforme de conformidad con lo normado en el Art. 318 del C. G. del P., por ello la censura debe encaminarse a mostrar las falencias de la decisión que en cada caso se adopta, sin que sea admisible ir más allá del objeto propio de este mecanismo procesal.

En efecto, del artículo 317 del Código General del Proceso es posible advertir que el legislador estableció dos supuestos que dan lugar a la

terminación anormal del proceso, sin consideración del estado en que se encuentren; el primero de ellos, hace referencia a la necesidad de cumplir con una carga procesal necesaria para continuar con el trámite del proceso, frente a la cual se requiere al interesado a efectos de que la satisfaga dentro del término de treinta (30) días y la segunda, en la que ya no se tiene en cuenta el cumplimiento o no de una carga procesal, por cuanto es suficiente con comprobar la paralización del proceso, sin que medie causa legal para ello, por el término que indica la norma -uno (1) o dos (2) años dependiendo si existe o no sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución-, en cuyo caso no deviene necesario realizar requerimiento previo.

Bajo los anteriores derroteros y descendiendo al caso objeto de estudio, habrá de precisarse que nos encontramos frente al segundo supuesto que fija el artículo 317 del C.G.P. para la configuración del desistimiento tácito, al efecto reza la norma en cita:

*2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, **se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo**. En este evento no habrá condena en costas "o perjuicios" a cargo de las partes. (resaltado fuera de texto)*

De esta manera, se tiene: la última actuación registrada en el plenario data del 26 de febrero de 2020 auto por medio del cual el despacho ordenó el emplazamiento del demandado FERNANDO JOSÉ GÓNZALEZ luego, para la fecha en que se dispuso la terminación del proceso, 3 de septiembre de 2021, el término de un año se encontraba ampliamente superado.

Ahora, frente a la ausencia de requerimiento previo a la terminación del proceso a la que alude el recurrente, resulta suficiente con dar lectura a la normativa transcrita para concluir que expresamente dispone que en aquellos casos en donde la inactividad del proceso supere un año se procede a su terminación sin que medie requerimiento previo, lo anterior tiene sentido, bajo el entendido que lo que se sanciona en dicho supuesto es la paralización del proceso, por ende, no hay orden de cumplir con una carga procesal.

A propósito, el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 9 de febrero de 2019 y ponencia del Magistrado Manuel Alfonso Zamudio Mora, trajo a colación lo siguiente:

"En este evento no es necesario requerimiento alguno, como tampoco debe el juzgador verificar de quién dependía el impulso de la actuación: si del juez o de las partes. Será suficiente el hecho

objetivo de la permanencia del proceso en la secretaria del despacho.

Precisamente porque en esta segunda modalidad no existe –ni debe hacerse– revisión de las razones por las cuales el proceso está inactivo, es por lo que, de una parte, no habrá condena en costas o perjuicios, y de la otra, cualquier actuación oficiosa o de parte, de cualquier naturaleza –que implique, desde luego, actividad procesal– interrumpe los términos en cuestión.” (TSB. Auto de 15 de septiembre de 2014. M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez).

En virtud de lo anterior ha de concluir que el lapso al que alude el numeral segundo del artículo 317 del Código General del Proceso es objetivo, lo que releva al juzgador de requerir a la parte a efectos de que satisfaga una carga procesal o que defina a cargo de quién estaba el impulso de la demanda, de modo que lo que se sanciona es la paralización del proceso, esto teniendo en cuenta que cualquier actuación, de cualquier naturaleza interrumpe dicho plazo.

En efecto, si la norma indica que “cualquier actuación de oficio o a petición de parte , de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en dicho artículo “ resultaba suficiente con un actuar diligente por parte del inconforme para haber precavido la terminación del proceso del que ahora se duele.

Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que, pese a que en efecto el Artículo 10. Del Decreto 806 de 2020 dispone que: “Los emplazamientos que deban realizarse en aplicación del artículo 108 del Código General del Proceso se harán únicamente en el registro nacional de personas emplazadas, sin necesidad de publicación en un medio escrito.”; situación que tal como refiere la parte actora le releva de cumplir con la carga teniente a realizar la publicación en el periódico oficial, no es menos cierto que la orden impartida en proveído de data 26 de febrero de 2020, se sujetó a la normatividad vigente, esto es, el artículo 108 del C.G.P., motivo por el cual a la entrada en vigencia del Decreto 806 transcurriendo más de tres meses sin que el extremo actor cumpliera con la carga impuesta, situación que deja en evidencia que desde mucho antes de que se exhortara al recurrente para que integrara el contradictorio ya tenía conocimiento del deber que le asistía de convocar al demandado y aun así se mantuvo renuente.

Así mismo, aun cuando el despacho no desconoce el cambio de normativa, nótese que, con posterioridad al 4 de junio de 2020, no medió por parte del extremo actor solicitud teniente a justar el trámite a la nueva reglamentación o a requerir a secretaría a efectos de que cumpliera con su carga, de modo que, sin mediar orden previa del despacho, ante la existencia

de más de 1500 proceso activos, resultaba improbable para la secretaría a *mutuo proprio* dar impulso al proceso.

De otra parte, memórese que, el artículo 78 en su numeral 6, determina como deber de la parte “ *realizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la integración del contradictorio*” de suerte que, no acreditó el extremo actor que previo a la entrada en vigencia y habiendo transcurrido más de tres meses procediera con el emplazamiento en el diario oficial, como tampoco elevó solicitud alguna con el objeto de que se adecuara el trámite a la nueva normativa.

Finalmente, en virtud a lo reglado en el artículo 321 del Código General del Proceso, se negará el recurso subsidiario de apelación, por tratarse éste de un proceso de mínima cuantía y, por ende, de única instancia.

En conclusión, como en el presente asunto se encuentran dados los presupuestos para la finalización del proceso por desistimiento tácito, se confirmará el proveído recurrido.

En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, el **JUZGADO SETENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.** Convertido Transitoriamente en el **JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE** esta Ciudad

RESUELVE

PRIMERO: NO REVOCAR el auto de data tres (3) de septiembre de 2021, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NEGAR el recurso subsidiario de APELACIÓN conforme lo reglado en el artículo 321 del C.G.P.

Notifíquese y cúmplase,

GLENDALLETICIAMOYAMOYA

JUEZ

Notificación por estado: la providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No.05 hoy 28 de febrero de 2022

El Secretario, JONATHAN RACHID VERANO ROJAS.